



# VIOLENCIA ESTATAL CONTRA COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS MARCA EL INICIO DE 2025 AMENAZAS Y PERSECUSIÓN

Parte III

Lis García

Los procesos violentos no solo se realizan con desalojos, también se diseñan para crear una situación de zozobra y miedo constante en las comunidades rurales, tanto indígenas y campesinas; en este contexto las personas hacen un gran esfuerzo para permanecer en sus territorios, entendiendo que la organización comunitaria es lo que les da la posibilidad de resistir las diversas formas de violencia de las que son víctimas, y que se relatan en los siguientes casos.

## *1. Atropello a la Comunidad Primero de Marzo, Joajú - Canindeyú*

Pobladores y pobladoras del Asentamiento Primero de Marzo - Joajú, ubicado en el distrito Yvyrá Rovaná de Canindeyú, denuncian un continuo amedrentamiento por parte de la Policía Nacional, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) junto al Servicio de Inteligencia del gobierno. Según informan, esta comitiva busca recaudar información sobre los domicilios de dirigentes, con la aparente intención de desalojarlos posteriormente, tal

*Según las voces de los asentamientos, la diputada cartista Cristina Villalba se encontraría detrás de estos operativos represivos. La misma es señalada como aliada política del crimen organizado de ese departamento.*

como ocurrió en los asentamientos Edilson Mercado y 15 de agosto de Yasy Cañy, del mismo departamento.

Primero de Marzo es un asentamiento campesino construido con esfuerzo durante 12 años. Cuenta con más de 2.000 hectáreas dedicadas a la producción agrícola y ganadera, caminos vecinales, agua corriente, electricidad, cuatro escuelas y diversas iglesias. La comisión ha realizado gestiones formales ante el INDERT (expediente 1144/12), el Congreso Nacional (solicitud de expropiación) y la Procuraduría General. Este territorio conquistado para la reforma agraria, forma parte de las tierras malhabidas apropiadas ilegalmente por parte de la familia Bendlin. La comunidad Primero de Marzo, Joajú, denuncia que la empresa Perfecta de esta familia –así como la Agroganadera Pindó– beneficiaria de tierras públicas durante la dictadura, hoy se encuentran aliadas, incluso familiarmente, con Horacio Cartes.

Otros asentamientos que están sufriendo esta persecución en la zona son: 12 de Julio y Vy'a Rendá, así como 16 de Julio; Vaca retá está en riesgo también. Además, la violencia del Estado se recrudece en este departamento. El jueves 20 de febrero comunidades de la zona se movilizaron en contra de una amenaza de desalojo que había recibido el asentamiento San Miguel para ese día; y una amenaza de allanamiento de las personas que reocuparon las tierras de Edilson Mercado, tras el desalojo forzoso que este Asentamiento sufrió en enero.

Según las voces de los asentamientos, la diputada cartista Cristina Villalba se encontraría detrás de estos operativos represivos. La misma es señalada como aliada política del crimen organizado de ese departamento. Frente a ello, se conformó una coordinadora de asentamientos campesinos y comunidades indígenas de Canindeyú, como única alternativa para defender a las comunidades. En ese marco se están organizando en grupos, asambleas y plenarias permanentes en las comunidades y entre los asentamientos. Se reunieron el domingo 23 de febrero, y luego se unieron al Jotopá Guasú del 1° de marzo en Liberación.

## ***2. Imputación a 6 campesinas por detener fumigación - Asentamiento Juliana Fleitas - Caaguazú***

El asentamiento Juliana Fleitas, fruto de la lucha y resistencia contra el modelo agroexportador, mantiene una histórica oposición a la sojización. Durante la última temporada de siembra, los productores de soja realizaron fumigaciones en inmediaciones de la comunidad campesina, lo que generó una respuesta organizada por parte de los pobladores. Como consecuencia, 17 personas, incluyendo docentes, fueron imputadas por “invasión de inmueble ajeno” y seis de ellas enfrentan órdenes de captura.

El día 11 de febrero, el asentamiento amaneció sitiado con el objetivo de proteger las fumigaciones. La comunidad denuncia amenazas y la situación de vulnerabilidad en la que viven los niños y niñas. La comunidad continúa en resistencia.

### **3. Amenaza de desalojo en el Asentamiento San Miguel de Maracaná - Canindeyú**

Mediante un comunicado difundido el 17 de febrero de 2025, los miembros de la comunidad San Miguel denunciaron que “una comitiva fiscal-judicial pretende realizar un desalojo ilegal contra los miembros del Asentamiento, por considerarnos invasores”. Ante esta situación, indicaron que el asentamiento está constituido hace más de 9 años en forma pública, pacífica y “con el debido reconocimiento de las autoridades”.

Así también mencionaron que los habitantes de la comunidad trabajan la tierra, “cada miembro y dueño de parcela, cuenta con producción de autoconsumo familiar como poroto, mandioca, maíz, maní, plantaciones frutales, animales domésticos, ganado vacuno, camino de acceso a la comunidad, instalación de electricidad dentro de la comunidad. Cuentan con tres pozos artesianos, dos puentes de madera, los dueños de parcelas tienen construidas sus casas con material cocido y madera, con la comodidad requerida para ser habitable, es decir, es un asentamiento bien constituido en el distrito de Maracaná”.

El Asentamiento está compuesto por 230 familias campesinas que ocupan 2.300 hectáreas y que ante el riesgo de ser desalojadas han solicitado el apoyo de autoridades nacionales, departamentales y locales. En ese sentido el Intendente de Maracaná ha manifestado su acompañamiento a los pobladores y solicitó evitar el desalojo, más aun atendiendo que las familias “cuentan con dictamen favorable de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara de Senadores para la ley de expropiación, lo cual demuestra la existencia de actos posesorios”. El 20 de febrero, una contundente movilización de organizaciones y comunidades locales en el cruce Suizo Cue, Maracaná – Canindeyú, logró frustrar la amenaza de desalojo.

### **4. Resistencia Campesina en Toryveté, ante Amenaza de Desalojo**

En la Colonia Toryveté de Hernandarias, aproximadamente ciento treinta familias de la Federación Nacional Campesina (FNC) desde la primera semana de marzo se encuentran en estado de alerta ante la inminente amenaza de desalojo de las tierras que ocupan desde hace casi un año. Las familias campesinas y sus hijos e hijas, han declarado su firme intención de resistir cualquier intento de expulsión, reivindicando la propiedad de la parcela actualmente administrada por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO).

Los pobladores y pobladoras de este Asentamiento denuncian la existencia de un acuerdo de arrendamiento entre la SENABICO y un grupo de colonos brasileños para la siembra de soja, lo que explicaría la búsqueda de expulsión de la comunidad campesina. La tierra en disputa forma parte de una extensa propiedad que perteneció a Hussein Mounir Mouzannar, buscado internacionalmente por actos de terrorismo relacionados con el atentado contra la AMIA en Argentina en 1994. Todos los bienes de Mouzannar fueron objeto de una inhibición general de enajenar y gravar.

*Los pobladores y pobladoras de este Asentamiento denuncian la existencia de un acuerdo de arrendamiento entre la SENABICO y un grupo de colonos brasileños para la siembra de soja...*

Los campesinos y campesinas asentados en el Asentamiento argumentan que en las más de 500 hectáreas de producción frutihortícola que han desarrollado, se encuentran cultivos que defenderán a toda costa para evitar su destrucción durante un posible desalojo. Además, han manifestado que cuentan con el respaldo de diversas comunidades y departamentos afiliados a la FNC, lo que augura una resistencia organizada y sostenida.

### *Algunas reflexiones finales*

Los desalojos forzosos, que se recrudecieron desde la promulgación de la Ley Zavala Riera, constituyen una grave violación de derechos fundamentales como el derecho a la vivienda adecuada, la alimentación, la salud, la educación y la seguridad personal. La falta de garantías procesales, el uso desproporcionado de la fuerza y la omisión de medidas para proteger a poblaciones vulnerables como mujeres y niños, son prácticas recurrentes en los desalojos, las cuales exponen a las poblaciones a situaciones de pobreza extrema, violencia física y psicológica, y un profundo trauma en las comunidades afectadas.

La escalada de desalojos forzosos contra comunidades campesinas e indígenas, revela la histórica articulación entre el Estado y el sector agroexportador, donde los intereses de este último prevalecen sobre los derechos fundamentales de las poblaciones rurales. Las instituciones represivas del Estado –lejos de garantizar la seguridad y el bienestar de la población– se convierten en instrumentos para la expansión del modelo de agronegocios, el cual es devastador para los bienes comunes de la naturaleza y las comunidades rurales.

El avance del agronegocio, impulsado por la deforestación masiva, el uso indiscriminado de agrotóxicos y la promoción de monocultivos para la exportación, ha generado una creciente dependencia alimentaria y una alarmante ola de violencia contra las poblaciones campesinas e indígenas. La respuesta del Estado ante la legítima demanda de tierra por parte de las comunidades campesinas e indígenas, ha sido sistemáticamente represiva y violatoria de los derechos humanos. Como telón de fondo de esta expansión, se observa de manera cada vez más notoria la presencia de intereses vinculados al crimen organizado en connivencia con representantes del partido colorado, sectores que se han articulado en la total impunidad, con una fuerte protección estatal<sup>1</sup>.

Ante esta situación crítica, las comunidades campesinas e indígenas han respondido con una creciente organización y resistencia, fortaleciendo la solidaridad y la alianza entre los asentamientos afectados. La difusión de información y la construcción de estrategias conjuntas para enfrentar las amenazas de desalojo, se han convertido en herramientas fundamentales para la defensa de sus derechos. Además, se encuentra en curso, la organización de importantes marchas a ser desarrolladas en Asunción en la última semana de marzo, como resultado de una articulación entre los diversos sectores populares convocados al calor de la resistencia campesina e indígena.

<sup>1</sup> Los recientes casos de asesinato de líderes campesinos como Jacinto Duarte y Osvaldo Varela, perpetrados en un contexto de recrudecimiento de la violencia fiscal-policial, evidencia la impunidad con la que operan los actores involucrados en defensa de los intereses agroexportadores.